

En las últimas décadas los países de América Latina y el Caribe han dado pasos importantes en los ámbitos social y económico. Las reformas económicas y la liberalización han contribuido a la estabilidad macroeconómica. Las reformas políticas e institucionales han logrado avances en la consolidación de la democracia y las instituciones democráticas en toda la región. Las reformas sociales también han tenido efectos importantes. Cualquier persona goza hoy de mejor salud, está mejor educada y vive más años. Las mujeres, por su parte, han logrado avances en la vida económica y pública. A pesar de este progreso, queda mucho por hacer en las áreas de reducción de la pobreza, desigualdad y exclusión social, que son temas candentes para la región y que han limitado el crecimiento y el progreso social y político. Los problemas de eficiencia, efectividad y baja cobertura de la población pobre y excluida continúan afectando la generación de esfuerzos de reforma en salud, educación y vivienda. Los mayores niveles de violencia e inseguridad, que han sido grandes preocupaciones en las dos últimas décadas, se combinan con la pobreza y la desigualdad para detener el crecimiento económico e impedir el desarrollo social.

La agenda de desarrollo de la región se centra en reformas económicas destinadas a abrir más el mercado pero no pone énfasis suficiente en la lucha contra las graves desigualdades sociales que todavía afectan a la región. Los periodos recientes de crecimiento económico en América Latina y el Caribe no han estado acompañados por un fuerte crecimiento del empleo o una reducción significativa de la pobreza. Las mejoras que experimentaron los indicadores sociales promedio, los cuales se han reflejado en el Índice de Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienden a ocultar las grandes disparidades existentes en cuanto a capital humano,

condiciones sociales y estándares de vida entre las diferentes regiones dentro de los países, entre los ricos y pobres, mujeres y hombres, pueblos indígenas y otros grupos, entre afrodescendientes y otros, así como también entre poblaciones rurales y urbanas.

Desde 1990 los países latinoamericanos y caribeños han progresado en la reducción de la pobreza, pero los avances han sido modestos. Varios estudios indican que la reducción promedio en la incidencia de la pobreza ha sido de poco más del 10%. Sin embargo, dado el crecimiento de la población, el número absoluto de pobres aumentó en esa década. Además, debido a que el crecimiento económico ha sido más lento y a las crisis de los tres últimos años, los avances logrados en algunos países se revirtieron. Si, para medir la pobreza, se toma el porcentaje de población que vive con menos de dos dólares por día (en paridad de poder de compra), la región entró al siglo XXI con un tercio de su población viviendo en condiciones de pobreza.

En la mayoría de los países de la región, la pobreza está estrechamente relacionada con niveles relativamente altos de desigualdad de ingreso. Los países latinoamericanos y caribeños tienen unos de los niveles más altos de desigualdad en el mundo. Más aún, en gran parte de los países, la desigualdad es más alta de lo que se esperaría dado su nivel de desarrollo. El coeficiente de Gini para toda la región es de un 25% más alto de lo que debería ser según su PIB per cápita. Si la distribución del ingreso en la región correspondiese a su nivel actual de desarrollo, el número de pobres se vería reducido a la mitad. Por debajo de esta desigualdad de ingreso, se encuentran grandes desigualdades en la distribución de bienes, entre ellos, educación, tierra y crédito. De acuerdo a estudios recientes, la duración promedio de escolarización para el 20% más pobre de la población es de sólo cuatro años, mientras que para el 20% más rico es de 10 años. En los países para los cuales se dispone de datos, los niños pobres tienen más desventajas (o “fracasos” de desarrollo, como alta mortalidad infantil, altos niveles de deserción escolar y desempleo juvenil) mucho antes que los niños en mejores condiciones económicas, lo cual reduce significativamente las probabilidades de que puedan llegar a tomar parte en una fuerza laboral competitiva y escapen de la pobreza.

Los bajos niveles de capital humano de los segmentos más pobres de la fuerza laboral han limitado las oportunidades que surgieron de la liberalización comercial y financiera. En la mayoría de los países, el crecimiento se ha concentrado en sectores exportadores de capital intensivo y servicios modernos con altos grados de productividad laboral. Los trabajadores que cuentan con cierto grado de educación se han beneficiado grandemente de la liberalización y el mayor crecimiento de la primera mitad de la década de los noventa. Sin embargo, los salarios de los trabajadores que carecen de educación han quedado estancados y, en algunos casos, hasta disminuyeron

en términos reales. Esta situación ha profundizado la desigualdad y reducido el impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza.

La exclusión social exagera el problema de la desigualdad, ya que es, a la vez, su causa y consecuencia. Las poblaciones socialmente excluidas de la región, ya sea por género, edad, raza, etnia, discapacidad y VIH/SIDA, status migratorio u otros motivos de exclusión, sufren múltiples desventajas, estigma y discriminación. Además, siempre se encuentran en la peor posición para alcanzar progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Banco es un socio activo en los esfuerzos por responder a los problemas más preocupantes de los países de la región, lo cual hace en el contexto de las estrategias para los objetivos fundamentales de crecimiento económico sustentable y reducción de la pobreza y promoción de la equidad social. Esta sección describe una porción del apoyo específico que SDS proporciona en las áreas de reducción de la pobreza, equidad social y desarrollo social, por medio del trabajo de la Unidad de Pobreza y Desigualdad, la Unidad de Educación del Subdepartamento de Educación, Ciencia y Tecnología, y el Subdepartamento de Desarrollo Social y Gobernabilidad, que incluye la División de Programas Sociales, la Unidad para la Igualdad de Género en el Desarrollo, la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, y la División del Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil.

INICIATIVA DE CAPITAL SOCIAL, ÉTICA Y DESARROLLO

[www.iadb.org/etica]

La Iniciativa de Capital Social, Ética y Desarrollo fue creada para servir de catalizador para impulsar las temáticas de ética, desarrollo y capital social por parte de gobiernos, partidos políticos, entidades empresariales, sindicatos, universidades, comunidades religiosas y organismos no gubernamentales. Las áreas de trabajo de la iniciativa incluyen la responsabilidad social de las políticas públicas, el fortalecimiento del voluntariado, la participación ciudadana, el empoderamiento de las comunidades desfavorecidas y la inserción de los conceptos de ética y capital social en los programas universitarios. La metodología ha ser usada incluye la creación de conciencia y generación de discusión sobre estos conceptos; la creación de conocimientos; la conformación de redes; la colaboración con otros organismos internacionales; y la

implementación de acciones concretas. La Iniciativa fue transferida a SDS en el 2005.

La Iniciativa tiene cinco objetivos fundamentales: (i) estimular el análisis y la discusión de los desafíos y dilemas éticos así como la toma de responsabilidad sobre los mismos por parte los principales decisores; (ii) cooperar en áreas tales como el fortalecimiento del voluntariado, la extensión de la responsabilidad social de la empresa privada y la adopción de códigos éticos por parte de actores sociales clave; (iii) impulsar la inclusión de metas y criterios que impliquen dimensiones éticas y movilización de capital social en la preparación e implementación de proyectos de desarrollo; (iv) promover la integración de programas sistemáticos de enseñanza de ética para el desarrollo a los currículos educativos; (v) conformar una red de centros académicos y de investigación para llevar adelante acciones de largo plazo en ética y desarrollo; y (vi) impulsar el conocimiento y tratamiento de las temáticas de ética, desarrollo y capital social por parte de los medios masivos de comunicación. Se han organizado reuniones sobre temas tales como la responsabilidad social universitaria, la creación de una cultura de la transparencia, y el empresariado juvenil y el voluntariado, entre otros.

UNIDAD DE POBREZA Y DESIGUALDAD (SDS/POV)

[www.iadb.org/sds/pov/index_pov_s.htm]

SDS/POV proporciona liderazgo técnico en las áreas de reducción de la pobreza y promoción de la equidad social, contribuyendo a mejorar la calidad y el impacto de las actividades prestatarias y no prestatarias del Banco en estas dos áreas. La Unidad también es responsable del seguimiento de la cartera de préstamos del Banco en cuanto a cómo los préstamos están enfocados a asistir a los pobres y de dar apoyo para mejorar los mecanismos de focalización en la pobreza dentro de las operaciones. Además, la Unidad busca mejorar la calidad de la información y análisis de la pobreza y la desigualdad. A continuación se mencionan las actividades principales de la Unidad de Pobreza y Desigualdad.

Foro de Equidad Social

[www.iadb.org/sds/pov/site_4324_s.htm]

SDS/POV organiza y lleva a cabo el Foro de Equidad Social, que fuera establecido en 1998. El objetivo de esta serie de reuniones bianuales es dar importancia central al tema de la equidad social en la agenda de los debates sobre las reformas políticas, económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Estas reuniones facilitan la discusión y evaluación de experiencias exitosas para promover la equidad, así como también el intercambio de ideas sobre políticas y programas. Entre los participantes al Foro se incluyen ministros de economía, finanzas y planificación, representantes de la sociedad civil, académicos y líderes de la opinión. Las reuniones han tratado temas tales como la incorporación de la equidad en el proceso de reforma macroeconómica en la región, la equidad y los mercados laborales, la transparencia y la rendición de cuentas y la justicia social.

MECOVI

[www.iadb.org/sds/POV/site_19_s.htm]

El Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América Latina (MECOVI) fue establecido en 1997 en reconocimiento de la urgente necesidad de contar con un sistema de información con datos confiables para medir la pobreza y la desigualdad y de disponer de indicadores sociales en todos los países de la región. En forma conjunta con el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los gobiernos de los países, el Banco proporciona financiamiento, liderazgo técnico y coordinación general a las actividades destinadas a fortalecer la capacidad institucional de cada país para implementar y analizar un sistema para realizar encuestas de hogares que sea de alta calidad y sirva para propósitos múltiples. Un elemento importante del componente regional del programa es la creación de una base de datos de encuestas de hogares que sea de fácil utilización.

Apoyo a la Iniciativa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

[www.iadb.org/sds/POV/publication/publication_21_3594_s.htm]

SDS ha desarrollado un proyecto técnico para apoyar a los países en la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por medio del fortalecimiento de la capacidad de instituciones nacionales y la promoción del consenso sobre las estrategias políticas en pro de los pobres. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL y el Banco Mundial están implementando este proyecto

en asociación con el BID. El apoyo de SDS para implementar la iniciativa de los ODM ha incluido la organización de conferencias y seminarios internacionales y la publicación de un libro y CD-ROM.

Apoyo a las estrategias y documentos nacionales de pobreza

[www.iadb.org/sds/pov/site_3215_s.htm]

El Banco está proporcionando apoyo a los países miembros en la definición de estrategias nacionales y documentos de reducción de pobreza. Algunos de ellos han sido preparados en el contexto de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, en su sigla inglesa), mientras que otros están destinados a países de ingreso medio. Las estrategias globales de reducción de la pobreza son planes de acción a medio y largo plazo que fueron desarrollados por los gobiernos nacionales dentro de un marco participativo (basado en amplias consultas y en colaboración con una gran variedad de actores nacionales e internacionales). El BID ha brindado recursos de sus programas de asistencia técnica, cooperación y préstamos a los gobiernos de la región para apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales de reducción de la pobreza.

Diálogo Regional de Política sobre Pobreza y Protección Social

SDS da apoyo técnico al Departamento de Integración y Programas Regionales (INT), que está encargado del funcionamiento de la Red de Pobreza y Protección Social. Esta red examina los aspectos institucionales de los programas para combatir la pobreza en la región, para lo cual realiza investigaciones sobre experiencias regionales con programas de protección social y disemina las lecciones aprendidas. Este esfuerzo se concentra en áreas como: (i) la realización de análisis comparativo de las iniciativas de desarrollo y reducción de la pobreza en la región y otras partes del mundo; (ii) investigar las experiencias y mejores prácticas en programas de microcrédito para los grupos pobres que incluyen inversiones en capital humano; y (iii) análisis de la experiencia de los países de la región con los fondos de inversión social y programas de inclusión social. La investigación para el diálogo ayuda a identificar los principales obstáculos que tienen las políticas de reducción de la pobreza y de protección social en América Latina y el Caribe.

UNIDAD DE EDUCACIÓN (SDS/EDU) DEL SUBDEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

[www.iadb.org/sds/SCI/index_sci_s.htm]

SDS/EDU tiene una función integral en las actividades del Banco relacionadas con la pobreza, equidad e inclusión social. Por ello, los componentes de educación generalmente son una parte importante de programas y proyectos que tienen que ver con niños y jóvenes, salud, mujeres, pueblos indígenas, prevención de la violencia e inclusión social. SDS ha tenido una activa participación en el desarrollo de las estrategias para educación primaria y secundaria.

En la región los sistemas de educación han experimentado importantes mejoras y existe un creciente interés por compartir y coordinar esfuerzos para ese fin. Esta agenda internacional en expansión ha sido fuertemente apoyada por los niveles más altos de toma de decisión en reuniones de presidentes y ministros. Esto es de gran importancia porque el surgimiento de programas innovadores en la región, entre ellos, los de educación a distancia como vehículo para expandir la educación secundaria a las áreas rurales; programas condicionados de transferencia de dinero; apoyo enfocado en escuelas con niños desaventajados, y una serie de otros nuevos programas de alto impacto. También se debería resaltar la buena disposición de los sectores público y privado a hacer de la educación una prioridad real porque es lo que ha propiciado mejoras en el gasto público en educación. Adicionalmente, el impacto de las reformas de descentralización ha sido particularmente positivo cuando han estado acompañadas de una clara definición de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno y un plan adecuado para financiar la educación en un entorno descentralizado.

Se ha logrado, además, un progreso importante en las áreas de pruebas y evaluación. Un creciente número de países está participando en evaluaciones internacionales sobre aprendizaje de los estudiantes.

Diálogo de Política Regional sobre Educación y Recursos Humanos

SDS brinda apoyo técnico al Departamento de Integración y Programas Regionales, el cual está a cargo del funcionamiento de la Red de Educación y Recursos Humanos. Esta red proporciona un foro para discutir políticas e iniciativas de educación que sean de prioridad y para intercambiar ideas y buenas prácticas, analizar problemas comunes y explorar esfuerzos regionales conjuntos para mejorar los sistemas educativos de la región. Se han tratado temas relacionados con la reforma educativa, educación secundaria, desempeño y evaluación de maestros.

DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (SDS/SOC) DEL SUBDEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y GOBERNABILIDAD

[www.iadb.org/sds/SOC/index_soc_s.htm]

SDS/SOC apoya las operaciones del BID y asiste en la identificación y promoción de nuevas oportunidades para la acción del Banco en el área del desarrollo social, las cuales acelerarán el crecimiento y mejorarán el bienestar de las poblaciones de América Latina y el Caribe. La División trabaja en colaboración con los departamentos operativos del Banco, brindando asesoría técnica en temas prioritarios en las áreas de niños y jóvenes, salud y seguridad social, mercados laborales, diálogo y cohesión sociales, desarrollo urbano y preservación del patrimonio, así como también la prevención de la violencia.

Niños y jóvenes

[www.iadb.org/sds/SOC/site_10_s.htm]

El trabajo que SDS realiza en esta área enfatiza el cuidado y desarrollo de la niñez temprana porque está considerado como un enfoque costo-efectivo para tratar de solucionar los problemas de los niños pobres y la transmisión intergeneracional de la pobreza, pudiendo también mejorar los resultados de las inversiones que se hacen en otras áreas (por ejemplo, programas de educación, cuidado de la salud y prevención de la violencia). Adicionalmente, SDS ha estudiado, desde varios ángulos, otros factores que afectan a niños y jóvenes. Esto incluye la prevención del trabajo infantil, la investigación extensiva y desarrollo de estrategias en las áreas de educación primaria y secundaria y de capacitación vocacional, análisis sobre temas relacionados con la salud que afectan a este segmento de la población (embarazos de adolescentes y mortalidad infantil), investigación sobre los costos asociados con el abuso de menores; y desarrollo de una base de datos sobre programas exitosos para jóvenes.

Salud

[www.iadb.org/sds/SOC/site_11_s.htm]

Las actividades en este sector contribuyen al mejoramiento de la salud pública en la región por medio de la identificación de tendencias epidemiológicas y tecnológicas, la introducción de nuevas metodologías de gestión de la salud y la disseminación de información científica sobre políticas y programas de salud para asistir en el proceso de toma de decisión pública. Las investigaciones realizadas han tratado temas tales como riesgos laborales, gastos de salud, drogas farmacéuticas, servicios primarios y diferentes aspectos del VIH/SIDA (prevención, vulnerabilidad, discriminación). Además, SDS encabezó la iniciativa de promoción de la salud (*Vida sana es más vida*) para ayudar a los

países a identificar prioridades, fijar metas, desarrollar sistemas de información e indicadores y preparar estrategias y planes de acción en el sector salud.

Cohesión e inclusión social

[www.iadb.org/sds/SOC/site_2529_s.htm]

Las actividades en esta área ayudan a promover la inclusión y la participación de todos los individuos sin importar su raza, etnia, género o discapacidad física. SDS brinda apoyo técnico a los países prestatarios en sus intentos por expandir el acceso que los grupos socialmente excluidos tienen a servicios necesarios, condiciones físicas y derechos legales. Para alcanzar estas metas y contribuir a crear una agenda de cohesión social para la región, se le está dando mayor prioridad a la promoción de las instituciones democráticas, al combate de la pobreza y la desigualdad, el fomento de la inclusión social y la creación de un ambiente más propicio para lograr la equidad social. SDS ha coordinado la preparación de un plan de acción para combatir la exclusión social debida a razones de etnia, desarrolló un marco para la agenda de cohesión social y publicó una serie de informes sobre inclusión social y desarrollo económico.

El Fondo de Inclusión Social

[www.iadb.org/sds/soc/site_5594_s.htm]

Este fondo, que cuenta con varios donantes, fue establecido para dar apoyo a iniciativas de pequeña escala destinadas a la inclusión social de poblaciones indígenas y de ascendencia africana, personas discapacitadas y aquellas que viven con VIH/SIDA y las mujeres pobres. Hasta el momento, el Fondo ha recibido contribuciones de parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (UK-DFID, en su sigla inglesa). El Fondo tiene tres objetivos principales. El primero es promover programas y políticas integrados y sostenibles para responder a la inclusión social por medio de una focalización en aquellos grupos que han sido tradicionalmente excluidos. El segundo es fortalecer instituciones locales que trabajan con estos grupos de la población, mientras que el tercer objetivo es hacer que los gobiernos sean más concientes de la importancia de la inclusión social como un objetivo del desarrollo.

Desarrollo urbano y conservación del patrimonio

[www.iadb.org/sds/SOC/site_15_s.htm]

SDS proporciona apoyo a los departamentos operativos para tratar de satisfacer la creciente necesidad de intervenciones efectivas multisectoriales y así hacer frente a los

cada vez más complejos problemas de desarrollo urbano de la región. Los especialistas de SDS dan apoyo para la reforma del sector vivienda, mejoramiento de asentamientos, desarrollo municipal y provincial, desarrollo urbano integrado, proyectos de revitalización de centros urbanos y preservación del patrimonio cultural. Entre las responsabilidades de SDS también se encuentran la preparación y la diseminación de buenas prácticas, así como el diseño de planes institucionales efectivos para la implementación. Los resultados del trabajo se diseminan por medio de un activo programa de reuniones técnicas, seminarios y publicaciones. El BID fue uno de los primeros bancos multilaterales de desarrollo en asistir a sus países prestatarios en la protección y desarrollo de monumentos y sitios arqueológicos de importancia. Las tareas de investigación en esta área incluyen el desarrollo de lineamientos operativos para vivienda, una evaluación de experiencias con programas de mejoramiento de barrios, préstamos para preservación del patrimonio urbano, subsidios para la vivienda, reforma del sector vivienda y mercados hipotecarios.

Prevención de la violencia

[www.iadb.org/sds/soc/site_471_s.htm]

El Banco está comprometido a trabajar en forma conjunta con los gobiernos de la región y las sociedades civiles para reducir la violencia dentro y fuera del hogar. SDS ha creado un Grupo de Reducción de la Violencia (compuesto por personal de la Unidad para la Igualdad de Género en el Desarrollo y la División de Programas Sociales), cuya misión es proporcionar apoyo técnico a los proyectos del Banco en el área de reducción de la violencia; realizar investigaciones sobre causas y consecuencias de la violencia en la región; identificar buenas prácticas en las cuales se han reducido los niveles de violencia social y doméstica y compartir esos conocimientos con partes interesadas en la región; apoyar a los gobiernos en el diseño de estrategias nacionales y municipales de prevención; y diseminar el mensaje de que la violencia se puede prevenir. Las tareas de investigación en esta área incluyen estudios de experiencias con policía comunitaria, violencia doméstica, abuso de menores, instrumentos para prevenir la violencia y la creación de una base de datos sobre programas de prevención de la violencia.

UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DESARROLLO (SDS/GED)

[www.iadb.org/sds/wid/index_wid_s.htm]

El objetivo de SDS/GEN es ampliar la contribución que las mujeres hacen al desarrollo y asegurar que participen en forma equitativa en programas financiados por el Banco y en los beneficios que produce el desarrollo. La Unidad ha tenido un papel

decisivo en hacer más sensibles al personal del Banco y de las agencias de los países prestatarios en cuanto a la importancia y beneficios que resultan de incluir a la mujer en el diseño e implementación de proyectos, así como sobre otros temas de género. SDS/GEN despliega una gran actividad en temas tales como mejorar la participación de las mujeres en la vida pública y cívica por medio del fortalecimiento de la habilidad que demuestran de llegar a ser líderes efectivas. SDS/GEN también lleva a cabo programas que benefician y apoyan a las familias y los niños y que responden a problemas asociados con la pobreza y la equidad social (incluyendo salud y educación).

PROLID

[www.iadb.org/sds/prolead/index_s.htm]

El Programa de Liderazgo y Representación de la Mujer, que fue establecido en 1998, es un esfuerzo conjunto del BID, la OEA/CIM, UNICEF, UNIFEM y el PNUD que tiene por objeto promover la participación ciudadana de las mujeres y su acceso a funciones de liderazgo en la vida pública y civil. Con el apoyo de los gobiernos de Noruega, Suecia y los Países Bajos, PROLID ha promovido la creación de capacidad y eventos para fomentar el intercambio de experiencias y opiniones, además de haber donado fondos a 55 organizaciones de América Latina y el Caribe. El Programa constituye un punto focal importante para disseminar información sobre actividades, redes, buenas prácticas y lecciones aprendidas en las diferentes áreas del liderazgo de la mujer.

Fondo para la Integración del Género

Este fondo fue establecido en 2005 para dar apoyo técnico y aumentar el nivel de la integración del género en iniciativas de desarrollo financiadas por el BID en América Latina y el Caribe. Apoya en forma directa la implementación de un Plan de Acción para la Integración del Género, el documento propuesto sobre Panorama Estratégico de Largo Plazo sobre Género y la nueva Política de Género. Toma en consideración las actividades que apoyan la integración del género durante todo el ciclo de proyecto; mejora la disponibilidad y calidad del apoyo técnico de los temas de género, así como también su análisis; y fortalece los mecanismos institucionales para que haya una debida rendición de cuentas y para lograr resultados y hacer su seguimiento.

UNIDAD DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DESARROLLO COMUNITARIO (SDS/IND)

[www.iadb.org/sds/IND/index_ind_s.htm]

SDS/IND centra su atención en temas relacionados con la reducción de la pobreza, la promoción de la equidad social y el desarrollo comunitario y cómo estos factores afectan a las poblaciones indígenas. Otras áreas de interés para la Unidad son el desarrollo y participación comunitarios, los reasentamientos involuntarios y el respeto por los factores socioculturales en general. El enfoque de las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas tiene tres aspectos. Se trata de facilitar el acceso de los pueblos indígenas a las operaciones normales del Banco en los sectores social, productivo y ambiental; se procura identificar proyectos innovadores para responder a las demandas y necesidades específicas de los pueblos indígenas; y, por último, se fortalecen las prácticas actuales para evitar, mitigar o compensar los impactos generados por proyectos de desarrollo que están enfocados sobre otros grupos de la población. La premisa fundamental de las actividades de SDS/IND es que el desarrollo socioeconómico sostenible va acompañado del fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y su mayor participación en la sociedad civil. SDS/IND también es responsable por asegurar la apropiada implementación de la política de reasentamientos involuntarios adoptada en 1998. Además, la Unidad es pionera en el uso de metodologías innovadoras para la consulta y participación comunitarias, tratando, al mismo tiempo, cuestiones más amplias relacionadas con el respeto por los valores socioculturales.

FONDO INDÍGENA

[www.fondoindigena.net/]

Fue establecido en 1992, con apoyo del BID y otras instituciones, como un mecanismo para apoyar las iniciativas de desarrollo indígena y facilitar el diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos de la región. Desde entonces, el Fondo ha obtenido un gran apoyo político de parte de los gobiernos y grupos indígenas. En mayo de 1997 se acordó la creación de un fondo de US\$ 100 millones (a ser administrado por el BID) para otorgar donaciones destinadas a fortalecer instituciones locales, capacitación, asistencia técnica y preparación de proyectos.

DIVISIÓN DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SOCIEDAD CIVIL (SDS/SGC)

[www.iadb.org/sds/scs/index_scs_s.htm]

SDS/SGC desarrolla propuestas para estrategias y políticas, brinda apoyo técnico a operaciones y promueve actividades en las áreas de modernización del Estado,

governabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil. A continuación se destacan algunas de las actividades en estas áreas.

Sociedad civil

[www.iadb.org/sds/SCS/site_1461_s.htm]

Los grandes cambios que se están produciendo en los países de América Latina y el Caribe han implicado una revisión sustancial de las funciones del Estado y de los diferentes actores sociales. A ese proceso ha contribuido, también, la emergencia en la agenda del desarrollo de un amplio consenso sobre la importancia de temas como el medio ambiente, género, etnia, equidad y estructuras sociales que generan la exclusión. Los países de la región llevan a cabo grandes esfuerzos para fortalecer sus sistemas democráticos al mismo tiempo que promueven el desarrollo económico y social, reconociendo los lazos existentes entre la democracia y el desarrollo. En este contexto, tiene creciente importancia la participación ciudadana, con respecto a las ideas sobre cómo puede contribuir al fortalecimiento de la democracia y a los procesos y mecanismos que pueden utilizarse para alcanzar los objetivos de desarrollo en la región. Sin duda, la participación es fundamental para que las políticas y proyectos de desarrollo respondan mejor a las necesidades de aquellos que tradicionalmente han sido objeto de exclusión económica, social o cultural. Las áreas de trabajo para fortalecer el rol de la sociedad civil en el proceso de desarrollo incluyen la participación ciudadana, consultas a la sociedad civil y actividades de difusión. Además de actuar como anfitrión de reuniones regionales con organizaciones de la sociedad civil, SDS ha coordinado el desarrollo de una estrategia y políticas operativas sobre la participación ciudadana en actividades del Banco. También ha publicado libros sobre pobreza y sociedad civil, programas de policía comunitaria, consulta comunitaria, derechos humanos y gestión de conflictos.

Justicia

SDS brinda apoyo a programas y proyectos para fortalecer la independencia del poder judicial, mejorar el acceso a la justicia y la capacidad de la administración de justicia en la lucha contra la corrupción, modernizar los sistemas de administración de la justicia, promover métodos alternativos de resolución de conflictos, actualizar la normativa procesal y proteger la seguridad ciudadana. Entre las actividades que se desarrollan en estas áreas se encuentran la creación de consenso y tareas preparativas para la reforma del sistema de justicia; fortalecimiento institucional; capacitación; promoción de la participación de ciudadanos y de organizaciones civiles; y mejoramiento del marco legal.

SDS ha sido anfitrión de una serie de conferencias regionales sobre justicia y desarrollo. También ha publicado libros sobre acceso a la justicia y equidad, así como también informes de buenas prácticas sobre reformas del sistema judicial.

Modernización del Estado

[www.iadb.org/sds/scs/site_1460_s.htm]

Los esfuerzos de reforma están destinados principalmente a consolidar la gobernabilidad democrática. Un desarrollo sostenible y equitativo requiere un Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el crecimiento económico sostenible, proporcionando un marco regulativo que sea propicio para el funcionamiento de los mercados, garantice un ambiente macroeconómico estable y seguro, predictibilidad legal y seguridad política, que sea capaz de adoptar políticas económicas y sociales apropiadas para reducir la pobreza y proteger el medio ambiente y que, además, implemente estas políticas en forma eficiente, transparente y responsable.

Históricamente, en la región ha existido una relación deficiente entre el Estado y los mercados, por un lado, y entre el Estado y los ciudadanos, por el otro, lo cual ha erosionado las posibilidades de que se produzca un desarrollo sostenible y equitativo. El *déficit democrático* de la región se ha reflejado en autoritarismo, clientelismo, populismo, corrupción y la captura de las instituciones y políticas públicas por parte de intereses especiales. Esto resultó en acciones del Estado que desalientan el funcionamiento efectivo de los mercados y que, por el contrario, promueven la especulación y la búsqueda de ganancias. Al mismo tiempo, estos fenómenos han contribuido a que existan procesos de formulación de políticas que no reflejan las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, sino que más bien llevan a que amplios sectores de la sociedad se vean excluidos de gozar de los beneficios del crecimiento. Con respecto a este tema en particular, las áreas en las cuales SDS/SGC desarrolla su trabajo son los sistemas democráticos, el estado de derecho, la relación entre estado, mercados y sociedad y, por último, la gestión pública. SDS ha patrocinado conferencias sobre seguridad y desarrollo, reforma del Estado y gobernabilidad. También mantiene una base de datos de proyectos del BID en estas áreas y ha publicado libros sobre política, gobernabilidad, gestión pública y derechos humanos.

Diálogo Regional de Política sobre Gestión Pública y Transparencia

SDS provee apoyo técnico al Departamento de Integración y Programas Regionales, el cual administra la Red de Gestión Pública y Transparencia. Esta red trata temas que son de importancia vital para el éxito de los programas de reforma de la gestión pública.

Entre los temas de discusión se pueden mencionar la estructura y características de los sistemas de gestión pública, análisis de reformas en la región y otras partes del mundo, así como también los desafíos que presenta la reforma. La Red también explora lecciones aprendidas, buenas prácticas y enfoques útiles en áreas principales como: sistemas de alta gestión pública; relaciones de trabajo en el sector público; la economía política de la reforma de la gestión pública; nueva tecnología para la reforma de la gestión pública; programas de capacitación y reasignación del personal del sector público; sistema salarial del sector público; planificación presupuestaria y administración de recursos humanos; y provisión alternativa de servicios.

Desarrollo subnacional

SDS apoya a los países prestatarios en sus esfuerzos para promover el desarrollo socioeconómico por medio de la reasignación de responsabilidades y recursos a los gobiernos subnacionales y locales. Para este fin, ha preparado una estrategia y realizado investigaciones para definir los objetivos que el Banco puede promover entre aquellos países prestatarios que están comprometidos con el desarrollo subnacional. Estas publicaciones también contienen recomendaciones en cuanto a métodos efectivos para lograr el desarrollo subnacional e identificar los instrumentos y recursos específicos que el Banco puede movilizar para lograr esa meta.

DESAFÍOS FUTUROS¹

El Departamento de Desarrollo Sostenible ha desarrollado instrumentos efectivos, programas y actividades para contribuir a la comprensión y resolución de cuestiones que impiden o promueven el progreso social, económico y político de la región. Las distintas divisiones y unidades de SDS continuarán ejerciendo un fuerte liderazgo intelectual en estas áreas en un momento en que la región se enfrenta a los desafíos del siglo XXI, entre los cuales se incluyen: fomentar la cohesión social; mejorar la efectividad del Estado y el sistema político para avanzar hacia un desarrollo equitativo; promover un progreso social que asegure acceso para los grupos pobres y excluidos a servicios de calidad de salud, educación y vivienda, y que reduzca su vulnerabilidad ante los males sociales; y promover la inclusión social.

La cohesión social es fundamental para promover el progreso social y económico y para lograr avances en prácticamente todas las áreas que están consideradas como de prioridad para la región, la cual tiene la peor distribución de

¹ La sección sobre desafíos en los capítulos 4, 5, 6 y 7 tienen en consideración las estrategias sectoriales.

ingresos del mundo. La falta de un contrato social que sea de base amplia y políticamente sostenible en América Latina y el Caribe impide el funcionamiento de sociedades con cohesión social, a pesar del progreso logrado en otros frentes. La persistente desigualdad de ingresos, la heterogeneidad racial y étnica, una sociedad civil pobremente estructurada y una economía informal de grandes dimensiones ayudan a explicar los débiles acuerdos sociales de la región, al mismo tiempo que limitan el establecimiento de contratos sociales modernos. Para vencer los desafíos de promover la cohesión y luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, se debería aprovechar las “ventanas de oportunidades” que existen en América Latina y el Caribe para llevar a cabo acciones efectivas. El resurgimiento de la gobernabilidad democrática representa una oportunidad para aumentar la cohesión social, fortalecer la base fiscal y consolidar la democracia. Una sociedad civil madura y comprometida y la creciente participación de las mujeres en la economía y el ámbito político son importantes puntos a favor. Además, el progreso que se está obteniendo en la promoción de la inclusión social y en fomentar el comercio y la integración regional brinda oportunidades para mejorar la cohesión en la región. Por último, la transición democrática (con la disminución proyectada de los índices de fertilidad y dependencia y, en consecuencia, con aumentos en el ahorro) proporciona otra oportunidad para reducir la pobreza y la desigualdad, especialmente si hay fuerte inversión en el capital humano de la futura fuerza laboral.

El desafío del *fortalecimiento institucional* es un punto vital en la promoción del desarrollo sostenible. Esto depende de acciones para fortalecer el sistema democrático y la sociedad civil, modernizar el Estado y promover la gobernabilidad. Para fortalecer los *sistemas democráticos*, se debería prestar atención al poder legislativo, el sistema de partidos políticos, las instituciones de supervisión y regulación, y a la sociedad civil. El poder legislativo, en particular, presenta problemas relacionados con la organización, la administración, el funcionamiento y los escasos recursos que limitan su capacidad de cumplir con sus responsabilidades. El sistema de partidos políticos es débil en toda la región y carece de la capacidad de procesar y combinar las demandas de los ciudadanos o de representar los intereses públicos en general.

Además, a pesar de su proliferación, las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo débiles, en parte debido a la exclusión social que sufren grandes segmentos de la sociedad. Los desafíos que presentan el estado de derecho y el sistema judicial en la región están relacionados con la incertidumbre o retrasos experimentados en la protección de derechos y obligaciones. Un importante segmento de la sociedad carece de seguridad con respecto a sus bienes, lo cual limita su acceso al crédito y a los

sistemas formales de trabajo y producción. Los principales desafíos para el establecimiento del estado de derecho son la independencia del poder judicial; las leyes y procedimientos obsoletos; las demoras judiciales; la falta de recursos; la ausencia de un sistema moderno de organización, información y administración; las barreras al acceso y limitaciones en la cobertura; limitaciones y deterioro de la infraestructura física; y la precaria protección de los derechos humanos. Como resultado, el sistema judicial carece de equidad, lo que hace que el acceso sea difícil para grandes segmentos de la población, además de reducir la confianza.

Los países de América Latina y el Caribe todavía no han logrado la *profesionalización y modernización de la administración pública* que es necesaria para la eficiente provisión de servicios públicos para reducir la pobreza. Durante las dos últimas décadas la reforma de la administración pública fue el resultado de severas crisis fiscales y shocks externos. Aunque se ha experimentado cierta mejora en la administración fiscal y económica, todavía falta llevar a cabo reformas institucionales. Se debería hacer una reforma de la asignación de recursos del gobierno para satisfacer mejor las necesidades de los grupos desaventajados. La provisión de los servicios del gobierno debería estar mejor concentrada en los grupos más necesitados. No se puede lograr estos objetivos sin reducir la politización de las administraciones públicas y su captura por parte de intereses especiales, promoviendo, en su lugar, una administración pública que actúe para lograr el bienestar general.

El desarrollo social sigue siendo un importante desafío para la región. Todavía existen grandes deficiencias en el acceso de los grupos pobres y excluidos a servicios sociales de calidad, especialmente en las áreas de salud, educación y vivienda. Además, en la mayoría de los países de la región los pobres son cada vez más vulnerables a los males sociales, especialmente al crimen y la violencia. La desigualdad en la cobertura y la calidad de los servicios de salud es la limitación más importante que tiene este sector. Aunque algunas reformas han ayudado a aumentar la cobertura de los pobres, todavía existen importantes desigualdades entre los grupos de menores y mayores ingresos, mientras que el gasto público en salud todavía es regresivo en algunos países. Los grupos excluidos por razones de género, raza, etnia y discapacidad no ven sus necesidades satisfechas debido a la falta de acceso a servicios de salud de calidad y a la escasa infraestructura existente para prestarlos. Específicamente, los esfuerzos deberían destinarse a fortalecer las reformas recientes. En países donde predominan las enfermedades transmisibles y problemas que afectan la salud materna o perinatal, se debería dar prioridad a combatir la mortalidad materna, la mortalidad y morbilidad infantil y las enfermedades infecciosas como el SIDA, la malaria, el dengue y la

tuberculosis. En aquellos países que están atravesando sus últimas etapas de transición democrática, se debería poner énfasis en la mortalidad temprana a causa de enfermedades no transmisibles.

En general, los sistemas de educación de la región han experimentado importantes mejoras durante la última década. Dichas mejoras son evidentes en términos de insumos (más escuelas, maestros mejor capacitados, una distribución más equitativa de libros de texto, etc.) y de resultados. Una mayor cantidad de niños de todos los orígenes socioeconómicos y étnicos van a la escuela, comienzan su educación más temprano, asisten a la escuela por periodos más largos de tiempo y completan niveles más altos de educación. A pesar de estos significativos logros, todavía quedan desafíos importantes por delante, el progreso ha sido lento y hay brechas en la calidad. Las evaluaciones internacionales demuestran que los estudiantes en toda la región no alcanzan a sus pares en Asia, Europa y América del Norte. Un tercio, o menos, de la fuerza laboral urbana ha completado los 12 años de educación considerados necesarios para garantizar un estándar decente de vida y así poder responder a las demandas de una economía que es cada vez más global. La reforma curricular, los estándares débiles o inexistentes y la urgencia de que se mejore la enseñanza también constituyen un desafío. Son pocos los sistemas educativos que han podido asegurar que todos los niños, sin importar su origen o condición, reciban un nivel mínimo aceptable de recursos educativos. Hacer que la escolarización universal se convierta en una terminación universal de la escuela primaria y secundaria también representa un desafío: en gran parte de la región, los índices de terminación de la escuela primaria llegan a aproximadamente el 75%. Se necesita llevar a cabo acciones para responder a la demanda de servicios y para que existan más posibilidades educativas. Se espera que los niveles actuales de matriculación de la educación superior se dupliquen en los próximos 10 años y, por esa razón, los gobiernos y el sector privado deben aumentar su capacidad para responder a este desafío.

Los retos en las áreas de vivienda y desarrollo urbano están relacionados con la vivienda inadecuada, la reforma del sector y la revitalización de los centros urbanos. Un tercio de la población urbana de la región vive en asentamientos informales o en barrios segregados que no cuentan con servicios esenciales. Las tareas más urgentes son las de proporcionar servicios sociales y de saneamiento que sean adecuados y de mejorar las condiciones de las viviendas. Para lograr esto, se debería continuar con los esfuerzos para transformar el mercado de vivienda en un sector económico principal, haciendo que los créditos para vivienda sean accesibles a grupos de bajos ingresos. Esto incluye políticas relacionadas con subsidios directos para vivienda y microcrédito para realizar

mejoras. Los países, además, deberían hacer esfuerzos para revertir el deterioro de centros urbanos históricos para mejorar las condiciones de vida.

Otra área en la que se ha obtenido un progreso muy limitado es la de prevención de la violencia. Los mayores niveles de *crimen y violencia* obstaculizan las mejoras sociales y económicas, afectan a los pobres en forma más severa y exacerban la alta desigualdad de ingresos de la región. Los índices de homicidios en América Latina y el Caribe son los segundos más altos del mundo y continúan aumentando. La incidencia de la violencia doméstica también es muy alta. En algunos países hasta un cuarto de las mujeres adultas y más de un tercio de los niños están expuestos a la violencia física en el hogar. El efecto negativo de la violencia en el rendimiento escolar limita el capital humano y las posibilidades futuras de desarrollo económico y social. Por otra parte, la violencia ha demostrado tener un efecto de contagio para la sociedad en general. Los crecientes espirales de violencia, a su vez, generan costos sociales y económicos importantes en términos de crecimiento económico previsto, menor capital social, niveles más altos de pobreza y mayor desigualdad. Entre las acciones específicas que son necesarias en esta área se puede mencionar el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones gubernamentales municipales para combatir el crimen y la violencia. También se necesita hacer esfuerzos para recolectar información confiable y comparable sobre la violencia y sus factores de riesgo. Uno de los mayores desafíos es la profesionalización de las fuerzas policiales. También se debería brindar apoyo para mejorar la coordinación entre la policía, el sistema judicial, los proveedores de servicios de salud, educadores, planificadores urbanos y ciudadanos comunes para tratar de prevenir la violencia.

Las mujeres en América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en educación, salud y nutrición, así como también en oportunidades de generar ingresos y participar en procesos sociales y políticos. Sin embargo, los promedios nacionales ocultan las crecientes desigualdades entre mujeres con niveles diferentes de ingreso, entre mujeres que viven en áreas rurales y urbanas, y entre aquellas de origen étnico o racial diferente. El aumento de las capacidades y oportunidades de las mujeres, acompañado de un entorno propicio (en el que las mujeres son activas participantes en la vida pública) y una mejor legislación son condiciones necesarias para el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género en la región. Pero esto requiere inversiones en política pública y desarrollo que se concentren en la reducción de la pobreza y la desigualdad con una perspectiva de género. Las contribuciones críticas que las mujeres hacen a sus familias, comunidades y sociedades deben ser reconocidas, apoyadas y compensadas. La igualdad sostenible de género requiere que las esferas

doméstica y pública se nivelen de acuerdo a los nuevos roles de las mujeres. Al mismo tiempo, la protección de los derechos de las mujeres como ciudadanas, así como también su seguridad y empoderamiento, requieren la existencia de un cuerpo de leyes que sean de conocimiento de aquellos que practican la ley y de los que son protegidos por ella. Las mujeres, además, deberán tener voz en los niveles en los cuales se toman decisiones, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo o judicial.

Se debe hacer esfuerzos especiales en la región para reducir la exclusión por razones de etnia. Cerca del 10% de la población de la región es de ascendencia indígena y los pueblos indígenas representan el 40% de la población rural y el 25% de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. A pesar de su diversidad cultural y lingüística, los más de 400 pueblos indígenas que viven en América Latina y el Caribe experimentan problemas similares con respecto a la pérdida de acceso a sus tierras y recursos naturales, falta de vínculos entre sus sistemas económicos tradicionales y la economía nacional, la marginalización y la desintegración cultural. El desafío con respecto a los pueblos indígenas de la región consiste en promover un *desarrollo con identidad*. Este concepto abarca la reducción de la pobreza (que tiene un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas), la desigualdad y la marginalización, aumentando así el acceso a las posibilidades de desarrollo. También están incluidos la igualdad de género, el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad cultural, territorios, recursos naturales y organizaciones sociales de pueblos indígenas. Existen cuatro prioridades principales para promover una estrategia de desarrollo indígena con identidad: incluir los temas indígenas en las agendas de desarrollo; empoderar a los pueblos indígenas para que utilicen todas sus capacidades en todas las facetas de los proyectos de desarrollo; mejorar el acceso a servicios sociales y financieros de calidad; y promover los derechos, legislación y seguridad jurídica de los pueblos indígenas.

Sin duda, en la próxima década la región debe renovar sus esfuerzos para responder al reto de la inclusión social, que tiene grandes implicancias en la reducción de la desigualdad y la promoción del desarrollo económico en un contexto de democracia y estabilidad social y política. Las poblaciones socialmente excluidas por razones de género, raza, etnia, edad, discapacidad y cualquier otra característica constituyen un gran segmento de la población de la región. Representan un gran segmento de los pobres, sufren desventajas múltiples y acumulativas, estigma y discriminación, además de presentar siempre indicadores sociales y económicos más bajos. En la mayoría de los países, las poblaciones excluidas no son minorías pequeñas, sino que llegan a representar entre el 25 y 50% de la población. Estos grupos, entre los que se incluyen la población de ascendencia africana, sufren de una

significativa discriminación en términos de acceso al trabajo, crédito, cuidados de salud y medios básicos de subsistencia. El desafío inicial de inclusión es el de reconocer el problema y sus dimensiones nacionales. Esto significa contabilizar la raza, la etnia, las discapacidades y otras características en censos nacionales y encuestas de hogares. El segundo desafío es entender cómo se ha arraigado la exclusión para que las políticas públicas puedan estar mejor enfocadas. Para esto se requiere un análisis más extenso del problema y cómo se perpetúa por medio de la educación, los mercados de trabajo y la provisión de servicios. El tercer desafío es crear nuevas políticas públicas inclusivas para examinar cómo se puede abordar la inclusión en el ámbito nacional y local. Para ello será necesario promover una variedad de instrumentos antidiscriminatorios, una mejor educación y capacitación, programas para combatir la pobreza que incorporen la inclusión y, por último, políticas inclusivas para los mercados de trabajo.